



Los organismos nacionales de monitoreo de los derechos humanos van dando sus cifras finales sobre lo ocurrido en este campo durante 1985. Uno de ellos es Socorro Jurídico, el más antiguo de los que operan en El Salvador. Las cifras comprobadas por esta institución comprueban de forma fehaciente la gravedad de la situación. El canciller Claramount quisiera que las Naciones Unidas dejaran de considerar a El Salvador como uno de los países que han de ser vigilados más de cerca y alude para ello a la mejora que se ha dado y a la voluntad democrática del gobierno. Pero los datos están contra él. Cualquiera sea la voluntad del gobierno respecto de los derechos humanos, es evidente que su capacidad para lograr un respeto satisfactorio de los mismos, aun en los casos más llamativos, es muy reducida. Aunque el número de asesinatos de civiles cometidos por las fuerzas gubernamentales haya descendido de 2507 en 1984 a 1655 en 1985, la cifra sigue siendo altísima. No se especifica cuántas de éstas son víctimas de bombardeos y acciones militares y cuántas lo son de asesinatos tipo escuadrones de la muerte o tipo de masacre militar directa contra población indefensa. Pero aun las acciones estrictamente militares se realizan a veces ~~con~~ no sólo con crueldad sino con auténtica sevicia. El último informe de CRIPDES (El Mundo, 27-II-86, p. 13), referido a la operación Fénix sobre Guazapa lo muestra, así como las declaraciones de quienes han tenido que huir o han sido arrancados violentamente de sus lugares de origen. A todo esto hay que añadir las capturas de reos políticos, cuya confesión extrajudicial es arrancada normalmente con diversos tipos de tortura, no excluidos los más crueles. Durante 1985 han sido enviados a la cárcel 777 nuevos reos políticos, de los cuales sólo 4 ex-agentes de cuerpos de seguridad, cuando entre ese tipo de personas se pueden encontrar los usuales ejecutores de los asesinatos, tipo escuadrón de la muerte.

También la guerrilla comete violaciones de los derechos humanos. Socorro Jurídico recoge para los meses Enero-Agosto un total de 59 muertos, de los cuales 19 son víctimas de ajusticiamientos y el resto por efecto de las minas colocadas por



el FMLN, como una de sus armas principales contra los ataques de la infantería. También pueden considerarse como violaciones de los derechos humanos la captura por razones políticas de los alcaldes -ya liberados- o los secuestros que eventualmente perpetra el FMLN. Todo ello hace que, en mucha menor medida que el gobierno, ofrezca flancos débiles a las instituciones internacionales que velan por el cuidado imparcial de los derechos humanos.

Mientras la guerra continúe no va a ser fácil que los derechos humanos mejoren. Y la guerra continúa. Con todo y la operación Fénix, que todavía continúa y quién sabe si en razón de ella, el FMLN ha dado muy fuertes golpes a la Fuerza Armada en estos últimos quince días. Prescindiendo de las bajas de la FA en Guazapa, el FMLN las ha hecho numerosas en ataques a Santa Rosa de Lima y Zacatecoluca, dos ciudades de regular importancia, a la Hacienda La Carrera, guardada por 250 efectivos militares y en la zona de Chalatenango; en el conjunto de estas operaciones, llevadas a cabo en lugares tan distantes, el FMLN ha ocasionado a la FA no menos de 120 bajas. Más aún, si se consideran las bajas tenidas en Opico ~~xx~~ - 6 miembros de la Defensa Civil y un soldado, según COPREFA), a pocos kilómetros de la capital y ciertamente ~~en~~ en el radio de acción de Guazapa. La FA, por su parte, reclama haberle hecho en la última quincena más de 50 bajas al FMLN, entre ellas las de un importante comandante, el comandante Danilo, en Oriente. Si a esto juntamos la destrucción de 40.000 quintales de algodón en La Carrera y el permanente sabotaje a la energía eléctrica, que ya se sufre todos los días en la propia capital, se puede concluir cómo la guerra no cesa, cómo la guerra lo va dominando todo, no obstante las apariencias contrarias.

Siguen, sin embargo, los reclamos por la paz, unidos a los reclamos que surgen espontáneamente del empeoramiento económico, notado más drásticamente ahora por las medidas impuestas desde Enero por el presidente Duarte. La más grande manifestación en este sentido fue la marcha por la supervivencia de los trabajadores, que



desfiló por las calles de San Salvador el día 21 de febrero, convocada por la UNTS. Más de 50.000 manifestantes -80.000 según los organizadores y 10.000 según el gobierno- recorrieron el centro de San Salvador, apoyados y/o contemplados por otros muchos miles de ciudadanos. Organizaban la marcha tanto sindicatos centristas e independientes, que hasta hace pocos meses eran la base social del PDC, como sindicatos progresistas y revolucionarios. Esta unidad de la clase trabajadora, movilizada sin ninguna ayuda del gobierno ni tampoco de la clase empresarial, es demostración patente de que algo nuevo está ocurriendo: a la necesidad objetiva que se abate sobre la mayoría del pueblo por el deterioro económico, cuya causa inmediata es la guerra y cuya causa última es el subdesarrollo crónico y la injusticia estructural, responden los sectores laborales moderada pero firmemente, unidos en lo sustancial, aunque mantengan sus diferencias en otros puntos. La marcha desfiló con el nuevo estilo que se ha dado a sí misma la clase obrera: sin estridencias, sin violencia, pero dispuestos a hacer lo que sea necesario para que sus reclamos sean atendidos. El presidente Duarte quiso cortar alas a los manifestantes apresurándose a hacer correcciones accidentales a las medidas, pero de poco o nada le sirvió. Se quiso desvirtuar el hecho masivo de la protesta con el argumento ya viejo de que eran masas manipuladas por el FMLN. Si así fuera, el gobierno debiera preguntarse por qué sus bases populares han cerrado los oídos a las ofertas gubernamentales y los han abierto a los reclamos del FMLN. Pero no es así, sino que objetivamente hay puntos esenciales en los que coinciden las propuestas del FMLN con las necesidades reales. Entre otros el fin de la guerra por el camino de la negociación y el cese de la ingerencia norteamericana sobre todo a través de la ayuda militar.

El presidente Duarte, por su parte, dice que no hay espacio político para el diálogo y que las medidas económicas son necesarias en beneficio de las mayorías populares. Pero el pueblo no se equivoca porque sabe que no tiene espacio político para el diálogo, debido a que se lo han cerrado la administración Reagan, la



Fuerza Armada y la empresa privada. Duarte no quiere caminar por el espacio político que le abre la clase trabajadora, el campesinado, la Iglesia y tantos que piden a gritos la renovación de las negociaciones. Todos estos comprenderían las medidas económicas, si hubieran sido realmente negociadas con ellos y si se compaginaran con una solución que disminuyera drásticamente los gastos de la guerra, que son causa principal del deterioro económico. Pero esto no lo puede ofrecer Duarte y en eso reside la contradicción de su gobierno.

Y es que Reagan va por otro lado, va por el lado de la fuerza militar. Nada menos que 311 mil millones de dólares está pidiendo al Congreso norteamericano para gastos de defensa. Sólo con que invirtiera 11 mil millones de esos en Centroamérica para empezar a resolver sus problemas económicos, Estados Unidos estaría mucho mejor defendido y Centroamérica, empezaría a alejarse de su situación de miseria. Basta para comprenderlo que el presupuesto entero de El Salvador para el año 1985 es de 500 millones de dólares. Nos podría corresponder con aquella cantidad cuatro veces nuestro presupuesto nacional, lo cual aliviaría ciertamente nuestro presente y favorecería, bien administrado, eso sí, a superar la injusticia estructural, raíz de nuestros males.

Pero las soluciones negociadas no son buenas para la administración Reagan, que por eso se ve desbordado por las propuestas de Gorbachov. En vez de ellas, pretende 100 millones de dólares para hacer la guerra terrorista en Nicaragua, contra la voluntad de muchos de los congresistas norteamericanos, desoyendo lo que le están pidiendo los cuatro países del grupo de Contadora, que laboran hace tres años por la paz en Centroamérica y los otro cuatro países del grupo de apoyo, que de verdad piensan en latinoamericano y desean soluciones que favorezcan realmente a Latinoamérica. Cada vez son más claras las voces de quienes en América Latina están en desacuerdo con lo hipocresía de la administración Reagan frente a Contadora. Últimamente el propio presidente electo de Costa Rica ha condenado la ayuda militar a los contras. Reagan no lo comprende y llama a su embajador en Costa Rica a consulta. Así nos va a los centroamericanos.